

## **EDITORIAL. Una aproximación a la actual crisis y a sus (posibles) efectos** (Con-Ciencia Social, nº 13, pp. 7-13).

No debería considerarse baladí, inmersos en los inicios de un nuevo período de depresión del capitalismo, recordar que las crisis constituyen un motor del desarrollo de este sistema, culminación del movimiento cíclico de acumulación y destrucción de capital y condición indisociable de su larga marcha en el proceso de la imposición de su red de vinculaciones desiguales como modelo históricamente dominante. Desde la crisis finisecular decimonónica (1870-73) a la de los inicios de los años noventa del siglo pasado, los efectos de éstas le han permitido incrementar o bien la dimensión de expansión territorial (*economía-mundo*) o bien la dimensión de fagotización y destrucción de formas de economía tradicionales y su transformación e inclusión en el sistema de relaciones capitalistas (*globalización*). Y en este camino, cuestión que tampoco deberíamos olvidar al enfrentarnos a la crisis actual, la búsqueda del incremento (supuestamente infinito) de la tasa de beneficio y el producto (pretendidamente ocultado) de la creciente concentración del capital han generado un rosario de destrucciones bélicas, una devastación del entorno natural y la liquidación de cualquier movimiento social y cultural capaz de dar, más allá de la resistencia etnicista o de la fragmentada oposición laboral local, una respuesta políticamente emancipadora.

### **Las raíces de una crisis**

El indudable éxito del capitalismo reformado (o capitalismo de rostro humano que los ideólogos del mismo nos vendieron) que surgió de la crisis del 29 y de los escombros de la II Guerra Mundial comienza a dar síntomas de desgaste desde finales de los años 60, tanto en su capacidad interna de consenso como en su capacidad externa de disuasión. Las revueltas del 68 y el recurso a la tenebrosa Escuela de las Américas podrían servir de ejemplo de las efervescencias erosivas que perturbaban la idílica metáfora del sistema como mundo feliz.

Dicho desgaste se veía, por una parte, retardado por el paralelo agotamiento y deslegitimación popular del modelo soviético, exhausto por la competencia armamentística de la guerra fría y reprobado por la indiferencia de sus propias poblaciones; por otra, acentuado por el disparado auge de los precios del petróleo en 1973-74 y 1979-81: el precio del barril pasó de los 2 \$ de 1970 a los 36 \$ de marzo de 1981.

La reintroducción de la locomotora japonesa en los intercambios internacionales, el trasvase de renta de los países capitalistas importadores de petróleo a las oligarquías de los países productores, las transformaciones obligadas en el proceso productivo (bien generadas por el cierre de los eslabones

ineficientes, bien exigidas por la nueva estructura de la demanda efectuada desde las oligarquías en ascenso) o los efectos inflacionistas del componente energético sobre las economías de los países tradicionalmente industriales tuvieron diversos efectos de los que, quizás, deberíamos, por su profundidad, destacar dos: la reducción de las tasas de beneficio del capital y el recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios.

La búsqueda de nuevos motores de reactivación económica, la desactivación y el desmontaje de los sistemas de seguridad social (reducción del peso del gasto social, abaratamiento del despido, aumento del paro, etc.), la beatificación del equilibrio presupuestario, la promoción y justificación de la ortodoxia neoliberal y otros más conformarán los elementos retóricos -difundidos e internalizados por sectores crecientes de población, gracias al sistemático “raca-raca” de los medios de control de la información- de un proyecto hegemónico de recuperación capitalista escondido bajo la denominación de Consenso de Washington.

Las medidas *de racionalidad tecnocrática* -inmanencia del ajuste económico, privatización desbocada de los servicios sociales, rebajas fiscales, desregulación de los mercados laborales y de los movimientos de capitales- aplicadas, sin distinción, por conservadores o socialdemócratas bajo el paraguas de ese Consenso, dieron vida y sentido a la exitosa, y tramposa, fórmula de “menos Estado y más Mercado”, como justificación a la extorsión política a la que se sometió a los países subdesarrollados. Dichas políticas, más la irrupción de las economías industrializadas del Extremo Oriente y el colapso del bloque soviético, volvieron a producir un duro golpe en el volumen de demanda del núcleo duro de las economías del sistema, que desencadenaron una nueva recesión entre 1991-95: continuado declive japonés, caída de la producción industrial europea, tasa negativa en el crecimiento estadounidense, destrucción masiva de empleos en los países de la OCDE y fuerte rebrote inflacionista. La situación se mantendrá durante la segunda mitad de la década de los 90 acompañada con las aventuras bélicas de la I Guerra del Golfo y de la exYugoslavia.

Las fuerzas dominantes del sistema imbuidas de su inexpugnable posición -derivada de la ausencia de rivales externos, de la destrucción de los contrapesos del Estado del Bienestar, que el pacto postbélico de la II GM había conseguido articular, de la disolución de las corrientes de contestación interna y del decidido apoyo de los poderes económicos, políticos y académicos- van a optar por la profundización en la vía japonesa hacia el crecimiento: mantener la rentabilidad de los beneficios sufragando un enorme consumo a crédito supuestamente avalado por la valoración ficticia de las burbujas (empresas puntocom, financiera, inmobiliaria). El inmenso déficit privado generado vino a sustituir al parcialmente redistribuidor déficit público del Estado del bienestar y, lo más

rentable todavía, la dinámica del fantasmagórico crecimiento permitía seguir sosteniendo lo que J. M. Naredo<sup>1</sup> ha denominado la metáfora encubridora de la realidad del sistema capitalista: más allá del “blablabla” dominante, **la producción de riqueza ha dejado de ser el objetivo, que se ha sustituido por la mera adquisición o apropiación de la riqueza.** Camino que nos ha conducido a la incierta encrucijada en la que nos encontramos y en la que, como siempre, los fundamentalistas defensores de la “mano invisible” del Mercado recurren a la férrea mano del Estado para sostener el Orden, sea desencadenando nuevas guerras (Afganistán, II Guerra del Golfo) o endeudando a las generaciones futuras por mor de la faraónica inyección económica con la que se ha premiado al disparatado subsistema financiero que ha ocasionado la crisis actual.

### **Previsibles efectos**

Sería vano y pretencioso pretender presentar un conjunto de efectos incuestionables de la crisis. Primero, porque nos encontramos en los inicios del derrumbe; segundo, porque desconocemos la capacidad de sostenimiento y recuperación que puedan contener las políticas de rescate puestas en funcionamiento, al margen de los voluntaristas fuegos de artificio que los voceros oficiales han puesto en marcha este verano; y, por último y consecuentemente, porque somos aún ignorantes de las dimensiones, fracturas y luchas que puedan llegar a desencadenarse en el futuro.

***Incremento del gasto público.*** La primera consecuencia que está teniendo la actual crisis resulta, cuando menos, paradójica respecto del discurso ortodoxo con el que se había abordado la salida de las crisis anteriores. Tanto los partidos políticos conservadores (con la excelsa excepción de Aznar, las sesudas plumas de *Expansión* y la muchachada kale borroca de *Intereconomía*, entre nosotros) como los socialdemócratas no han dudado en defender la necesidad de atender a los damnificados de la crisis.

Y entendemos que esta aparente paradoja se encuentra estrechamente ligada a dos circunstancias: de entrada, poder echar agua sobre los rescoldos que puedan atizar los estallidos de ira popular que el desvelo de las miserias del sistema provoca y, fundamentalmente, conseguir legitimar las oleadas de recursos públicos necesarias para proteger a la casta financiera, que, aunque ha ocasionado el desastre, mantiene su capacidad de dominio e imposición sobre los agentes políticos interpuestos. Esta volcánica erupción de recursos públicos habría que entenderla como reflejo de la profundidad del agujero al que nos ha conducido la ensalzada pandilla de generadores de excelencia,

---

<sup>1</sup> Puede releerse el nº 5 de *Con-Ciencia Social*, dedicado en parte a la obra y aportaciones de este autor.

que dicen los medios. Pero, también, es expresión de la doble incapacidad de la sacralizada ciencia económica para romper con su servidumbre hacia los aristócratas del sistema y para elaborar propuestas al servicio de las clases explotadas por el sistema de producción de plusvalía.

Dicho sea esto sin excluir los realineamientos que se irán produciendo a medida que vaya comenzando a vislumbrarse la salida de la crisis. Saneadas las entidades bancarias y encaminadas de nuevo al horizonte de los succulentos beneficios -incluidos los intocables pluses para sus intrépidos dirigentes o, según el lenguaje políticamente correcto, emprendedores generadores de riqueza-, retornarán de nuevo las voces del fundamentalismo liberal para reclamar austeridad, con poco más que mohínes de desagrado de los dirigentes socialdemócratas en los mítines de fin de semana con su parroquia. Es decir, volveremos a escuchar las exigencias sobre reducciones salariales, privatización de los servicios sociales y chantaje sobre los trabajadores con empleo estable y que el endeudamiento lo paguemos los demás y que así son las cosas. Conclusión lógica de la realidad de la economía como lo que es, lucha de poderes y no una mera cuestión de confianza, según el discurso mixtificador que conservadores y socialdemócratas nos han venido vendiendo como explicación de lo ocurrido.

*El avance de la flexiseguridad laboral.* En lo que va a haber continuidad, y se defiende sin tapujos, será en el continuismo de las propuestas que desde hace 15 ó 20 años vienen implantándose en el mercado laboral, bajo la originariamente sugerente metáfora de “reformas estructurales”: desregulación de las condiciones de trabajo, externalización y subcontratación por parte de las grandes compañías, despido libre no, pero, sin duda, algo que se le parezca, etc.

Las nuevas condiciones de competitividad que introduce la globalización, las políticas desreguladoras que, impulsadas por todos los gobiernos, por encima de su color, han propiciado una práctica dominante, que condiciona el conjunto de las relaciones productivas: la indiscutida prerrogativa empresarial de la organización de la producción. Dicha prerrogativa ha instituido, como punto central de la producción de mercancías, el principio de la descentralización. La combinación de tecnología + descentralización + fragmentación laboral permite a la dirección empresarial obtener el mayor margen de plusvalía, destruye las condiciones de un “trabajo decente” y aísla al trabajador, debilitándole en su relación con el capital. Con ello no se pierde un ápice en la generación de la plusvalía del capital, pero sí se oscurece la pertenencia de los asalariados a un cuerpo colectivo, desvinculándolo del sistema de relaciones solidarias que sostenía su empoderamiento. Y es ésta, **la fragmentación e invisibilidad del trabajador colectivo**, la consecuencia determinante sobre los asalariados y las organizaciones sindicales, secuela de la disolución del mecanismo que lo articulaba:

“la conciencia adquirida en los organismos que representan la fábrica como productora de objetos reales y no de beneficios” (A. Gramsci).

En suma, despotismo organizativo empresarial, inhabilitación sindical para hacerle frente, resignación y repliegue de sectores significativos de los trabajadores y asunción social de los costes que estas políticas generan: paro, prejubilaciones, accidentes laborales, precarización contractual y recorte de derechos, incremento de los contingentes humanos en el umbral de la pobreza e imparable aparición de bolsas de neomarginación.

Y, por supuesto, mágica volatilización de los dividendos generados (por ejemplo, la riqueza de la petrolera Exxon es superior a la de 182 países de la ONU), vía paraísos fiscales (seis, sólo en la UE) o ingeniería financiera. Ni la careta del *rostro humano*, ni la borrachera del *consumo degradado* que se nos impone podrán seguir encubriendo la dimensión real del capitalismo como *sistema canibal* (Santiago Alba).

***El escenario educativo.*** Los efectos que el impacto de la crisis termine provocando en el escenario educativo deben plantearse, a pesar de las incógnitas con las que hoy nos movemos, en relación con las tendencias y modificaciones que pueda llegar a conocer el actual modo de educación tecnocrático de masas. Vamos a analizar el impacto de la crisis en relación con alguno de sus rasgos significativos: reforzamiento de la escolarización, segmentación, complejidad del sistema escolar, privatización, etc.

A lo largo de este año hemos podido comprobar cómo el consenso sobre *la solución educativa* se ha visto claramente reforzado en el transcurso de estos meses: Gobierno, Sindicatos y CEOE consideraron el asunto elemento sustancial de la Mesa de Diálogo Social. En primer lugar, el Gobierno, con la cantinela del desarrollo de medidas en torno al I+D+i para suscitar un cambio en el modelo de desarrollo económico español; pero también los Sindicatos, sirva de ejemplo la revista (mayo'09) de la rama educativa de una Confederación sindical en la que se visualizaba paradigmáticamente el planteamiento  $E = SC_{\square}$  (Educación = Salida Crisis al cuadrado); y la patronal, en la que la rama catalana requería del tripartito la inversión en servicios sociales de los incrementos derivados del nuevo sistema de financiación, en la perspectiva de solicitar a continuación, como es de sospechar, su gestión privatizada.

No es extraño, por tanto, que los datos del inicio del presente curso escolar apunten a un reforzamiento de la escolarización: las oportunidades del masivo empleo barato, característica dominante en nuestro modelo de desarrollo, van a reducirse notablemente con el cierre del ciclo

expansivo del sector constructivo y el evidente empantanamiento de la actividad turística. Y, en consecuencia, los jóvenes, hasta ahora tentados por las expectativas de un curro inmediato y el acceso a un coche guapo, se verán forzados a mantenerse en las aulas, siguiendo las señales de regulación del tráfico que emiten nuestras autoridades y secundan efusivamente los tertulianos todólogos. El incremento de presión demográfica, que previsiblemente va a conocerse en los centros, exigirá una dotación de recursos para la atención de un contingente juvenil escasamente preocupado por los contenidos curriculares -formulados en competencias o en capacidades, que a los efectos es lo mismo- y absolutamente receloso de un título que apenas abre puertas para el acceso a la autonomía profesional y social. A la espera de la concreción efectiva de la anunciada reforma de la FP, no podemos más que insistir en que el cacareado proyecto Escuela 2.0 no supondrá mayores efectos que un reforzamiento en la expansión de la *totémica ideología de la digitalización* a la que el modernizado proyecto socialdemócrata se aferra como bálsamo de fierabrás: ante la incapacidad por introducir transformaciones reales en las relaciones sociales, avancemos hacia la igualdad con el ilusionante salvavidas del ordenador.

Paralelamente, MEC y Consejerías buscan el desarrollo de acuerdos para repescar a jóvenes sin título mediante el relanzamiento de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), establecimiento de programas de refuerzo (pomposamente denominados de Éxito Educativo), o la potenciación de la Educación de Adultos. Medidas perfectamente inútiles en las que suelen invertirse, proporcionalmente, más recursos en las dimensiones de propaganda y autobombo que en el sostenimiento efectivo de esos proyectos, pero que permiten a las Administraciones Públicas proyectar la sensación de que se está combatiendo la crisis y tranquilizar a los administrados con la tila educativa. Y todo esto sin descartar, nunca mejor dicho, el as en la manga de la ampliación de la obligatoriedad hasta los 18 años. Que entusiastamente nos venderían como *sustancial avance social*.

Junto a ello el avance ya no oculto, sino explícito, de planteamientos cuestionadores de prácticas contra las que la escuela pública fue beligerante desde sus orígenes: baste señalar el *cheque educativo* puesto en marcha en dos CC.AA. gobernadas por el PP (Madrid y Galicia) o la ruptura del régimen de coeducación con el mantenimiento de la financiación a los centros concertados que lo han puesto en práctica. Y no debemos olvidar que dicho planteamiento está siendo respaldado por el Conseller socialista de Educació en Cataluña sin atreverse a romper la práctica impuesta por el anterior gobierno de la derecha nacionalista. ¿Será el mismo futuro que le espera al cheque cuando *la izquierda* recupere el gobierno de aquellas comunidades?

Así pues, caben escasas dudas acerca de que el imparable proceso de las tendencias privatizadoras en educación vaya a paralizarse con el desencadenamiento de la crisis. La aplicación del comúnmente conocido como proceso de Bolonia resulta paradigmático en el avance de todas las dimensiones privatizadoras. En primer lugar, ha puesto de manifiesto las limitaciones e insuficiencias del sistema de articulación y representación de las voluntades ciudadanas en las decisiones políticas: nadie puede ocultar que sectores significativos del profesorado y del alumnado cuestionan dicho proceso, tanto en sus supuestamente benéficos objetivos como en el secretismo y aislamiento elitista con los que se han tomado las decisiones claves del mismo. Es decir, *privatización política*.

Junto a ésta, *privatización corporativa* en la definición del “peso curricular” de los departamentos en los estudios de grado: sustitución del debate científico por la confrontación académica que garantice el mantenimiento o ampliación de la parcela de poder en los equilibrios internos, o poderes de los mandarinatos, de las Universidades.

Y, para sellar el círculo, *privatización económica* con la inyección empresarial que condicionará los programas de investigación. No es que Bolonia introduzca la privatización, vigente desde hace décadas, sino que da un impulso vigoroso a este proceso. Las nuevas prácticas (becas por empréstitos bancarios) e insólitos criterios (valor de la producción intelectual en función de la jerarquización asignada a los medios en los que se publica) profundizarán las tendencias y derivas en el funcionamiento y en los objetivos dominantes de la institución académica: ciencia y mercado llevan largo tiempo conviviendo en la Academia, pero el equilibrio -más o menos costoso, en su seno- entre saber crítico y beneficio utilitario corre el serio riesgo de decantarse de manera sustantiva hacia el segundo, en un horizonte no excesivamente lejano.

Todo ello sin olvidar la consecuencia social más significativa, pues la nueva estructura académica va a suponer el refuerzo de una privatización económica, más peligrosa por encubierta, y de la segmentación del sistema educativo: la multiplicación del esfuerzo económico que, en un contexto de empobrecimiento, cualquier familia de las clases subordinadas deberá abordar para proporcionar a sus miembros la obtención del máster, título realmente relevante en el mercado laboral, y que empujará fuera de la carrera a una parte significativa de los miembros de estas clases sociales, desde siempre escasamente presentes en el segmento universitario.

Esto por lo que respecta a los escalones superiores del sistema educativo, pero la crisis podrá tener repercusiones sociales en los primeros niveles, especialmente en lo que hace referencia a los servicios complementarios privatizados. No es de esperar que las empresas encargadas del servicio

no vayan a repercutir el incremento de costes y precios en las familias usuarias de los mismos, familias depauperadas por la crisis o en riesgo de exclusión social por la pérdida de ingresos. Las administraciones educativas ¿aumentarán el montante de las becas?, ¿optarán por rebajar las asignaciones manteniendo el número de beneficiarios?, ¿controlarán de manera efectiva las condiciones de las prestaciones de las empresas?

No es ajena a las repuestas a estos interrogantes la desenfrenada actividad de producción legislativa y de intervenciones públicas a las que el nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha lanzado en defensa de la política de becas que se materializará durante el presente curso. Tradicionalmente la política de becas ha constituido una piedra angular de los planteamientos socialdemócratas, fundamentalmente en orden a la articulación de la educación con su emblemática propuesta de igualdad de oportunidades. En esa senda, los gobiernos del PSOE han desplegado un variado programa que abarca desde ayudas a los niveles no obligatorios hasta el refuerzo de aspectos de la vida universitaria, especialmente los relativos a la movilidad de los estudiantes. Desde la perspectiva que nuestra revista defiende, resulta obligado hacer hincapié en las sombras que tanta luminaria de coherencia suele ocultar. Más si cabe con el planteamiento fiscal que hasta el pasado verano han defendido el Presidente de Gobierno y sus responsables económicos, “bajar impuestos es de izquierdas”, lo cual parece constituir un importante torpedo a dicha política de becas.

En primer lugar, hay que señalar que una parte sustancial de la tarta de las becas en los niveles no universitarios se ha destinado a ayudas para la adquisición de libros por los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos y a ayudas al alumnado matriculado en el segundo ciclo de educación infantil en centros privados y que, según las declaraciones públicas del Presidente, se terminarán ampliando al primer ciclo de este nivel. Es decir, beneficios que canalizan las familias, pero con terminales reales definidas: suero sustancial para el sostenimiento de la economía política de la producción de libros marcada por los conglomerados editoriales; vitaminas para los emprendedores de los colectivos religiosos o empresariales dedicados al negocio de la enseñanza y, de matute, beneficios también para los sectores de las clases medias españolas que ocupan la enseñanza privada y concertada por inasistencia *libremente elegida*, eso sí, por las clases trabajadoras.

En segundo lugar, es cierto que, paulatinamente, las becas para universitarios están variando su régimen de concurrencia competitiva en reconocimiento como derecho de los estudiantes mediante la ampliación de los umbrales de renta y patrimonio familiar. Pero aquí caben unas consideraciones absolutamente ineludibles: nuevamente serán las clases medias profesionales, cuyos cachorros configuran mayoritariamente las cohortes de estudiantes universitarios, las beneficiadas, pues los de

las clases trabajadoras -incluidas en los niveles más bajos de los umbrales- se han visto obligadas a desistir, tiempo ha, de la carrera educativa, como puede comprobarse en todos los trabajos sociológicos sobre la estructura social de las Universidades. En el caso específico de la exención del pago de tasas es indiscutible que una familia de cuatro miembros con ingresos no superiores a 2.500 € mensuales se ve beneficiada, pero eso no quiere decir que los miembros de familias trabajadoras con ingresos en torno a los 1.500 € vayan a serlo: una cosa es ser potencial beneficiario y otra, muy distinta, beneficiario realmente efectivo.

En conclusión, la aportación efectiva de la política de becas a la modificación de la desigualdad real de oportunidades sigue siendo un brindis al sol, aunque sigue sirviendo para mantener ilusiones y respaldo electoral, pero con escaso poder de transformación sobre las condiciones sociales reales de los sectores más desfavorecidos de quienes electoralmente las respaldan.

En conclusión, la supuesta existencia de dos modelos educativos confrontados no ha pasado de munición para energizar a su correspondiente congregación, pero ha servido para ocultar la construcción de un consenso, aunque subyacente, real. Paulatinamente, han ido desapareciendo de la confrontación aspectos fundamentales que permitían identificaciones diferenciadas: escuela pública/escuela privada, laicismo, cuerpo único. Posteriormente, se han ido reintroduciendo aspectos tradicionales en la concepción del currículo, se han fomentado los planteamientos empresariales en el entendimiento de la dirección, de la gestión y de la participación social en la escuela o en las finalidades de la enseñanza (competencias). Finalmente, se ha dado carta blanca a las concepciones neoliberales sobre evaluación del sistema o del profesorado.

Y, ahora, lo último. Estamos en medio de una doble ofensiva que va a culminar la deriva hacia el cierre conservador del consenso educativo: la autoridad del profesor y el Pacto por la Educación. Concesiones ambas a las exigencias que desde siempre se han planteado por el corporativismo dominante. Ante los cambios que ha conocido la escuela en los últimos tiempos, el núcleo duro y dominante de la profesión ha elaborado un relato discursivo en el que prima la afirmación de un imaginario de seguridad arcaizante en lugar del necesario análisis crítico del rol que se nos pretende hacer jugar. Los sectores más conservadores del profesorado han alimentado la imagen del *profesor asediado*, coherente con la ilusoria distinción de las prácticas tradicionales y escasamente receptiva a la crítica y al esfuerzo de legitimación democrática que los nuevos contextos sociales y las exigencias que la articulación emancipadora del espacio escolar demandan. La *ocurrencia* de la consideración del profesorado como autoridad pública será una medida que refuerce el subterráneo autoritarismo que funda la institución escolar, que momentáneamente regenere el sentimiento de

recuperación del poder perdido y que, experimentada su ineficacia, termine reclamando la presencia del vigilante jurado como parte del paisaje de las aulas.

Respecto del Pacto se está convirtiendo en el oportunista banderín de enganche, al que el mismo Borbón se ha apuntado, alentado por plumas de todo color político. Baste decir que en nuestra opinión todo lo que se debía pactar ya está pactado, no por la vía del debate en el que la izquierda se ha ido desprendiendo de sus señas de identidad y no ha plantado resistencia a la voracidad de la derecha. En el alboroto que la propuesta de pacto ha desatado seguimos escuchando las habituales letanías del dominio estatalizante en la educación (Rouco Varela), de la recuperación de las competencias de Educación por el Estado (Rosa Díez) o de la necesidad de una educación troquelada sobre el valor del esfuerzo para favorecer el acceso al empleo y la competitividad (Pilar del Castillo), aderezadas, siempre, con el universal consenso sobre el elevado fracaso escolar del sistema o la intrínseca maldad de la LOGSE.

Y frente a todo ello las voces de la izquierda plantean una respuesta de apoyo acrítico sobre la base de que el Pacto permitirá “asentar unas bases más sólidas para construir una sociedad del conocimiento y un modelo de crecimiento sostenible y cohesionado” (C. Martínez, PSOE); o de que hay que evitar que la educación quede sometida al continuo vaivén de la coyuntura política (CC.OO. de Enseñanza); o reclamar, como fundamento del mismo, un incremento del PIB y lealtad institucional entre las administraciones educativas (FETE-UGT).

Escaso bagaje para articular una suma de voluntades transformadoras y clara expresión de la ausencia de alternativa a las políticas educativas efectivamente conservadoras que dominan en el panorama español. La construcción de esta alternativa es la exigencia realmente necesaria para repensar el papel de la escuela en la sociedad capitalista y para conseguir que la intuitiva, espontánea y caótica deslegitimación del capitalismo que ha puesto en marcha la crisis actual no quede difuminada o frustrada en la consciencia de los sujetos históricos que hoy la estamos sufriendo.